

Señores

JUZGADO TERCERO LABORAL DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE
E. S. D.

Referencia: EJECUTIVO LABORAL

Ejecutante: EFRAIN ORTEGA LUNA.

Demandado: MARÍA NUBIA FLOREZ ARISTIZABAL

RADICACIÓN No.: 2014-00382-00

MARÍA FANNY OSORIO DE FLOREZ, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadanía No. 29.656.939, obrando como Representante Legal Suplente de **INDUSTRIAS CONTINENTAL ARTÍCULOS ELECTRICOS FLORES OSORIO Y CIA. S. EN C.**, procedo a dar respuesta al Oficio No. 576 del 13 de mayo de 2019, conforme a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Debo advertir que en este caso, no se trata de ningún modo de desatender el mandamiento judicial intrínseco dentro del Oficio notificado, no obstante estimo pertinente poner a consideración de este Despacho, que si bien en virtud del artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, se enuncia la posibilidad sustancial de perseguir el monto de los aportes al capital social de la empresa deudora, siendo ésta una sociedad de personas, no es menos cierto que en el escenario actual, dichos aportes son plena garantía de los deudores que conforme a las normas imperativas, procesales y sustanciales, han aceptado las condiciones del acuerdo propuesto, y hoy hacen parte del trámite de reorganización empresarial que mi procurada se encuentra surtiendo bajo la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades, Juez natural del concurso.

En ese sentido, considero que es inviable el mandamiento judicial referente al embargo de cuotas sociales de quienes fungen como socios comanditarios, en tanto se propende por perseguir aportes que dentro del trámite concursal, amparan y son garantía de los acreedores, quienes atendieron el acuerdo, pretendiéndose por éstos, de conformidad con la normativa vigente, el reconocimiento de su obligación. Cabe resaltar que el acuerdo en la ley 1116 de 2006 propende concomitantemente por la recuperación de la empresa, como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo.

Puntualmente ha indicado la Jurisprudencia:

JUZGADO TERCERO LABORAL
DEL CIRCUITO DE PALMIRA VALLE
E. S. D.
01 / JUN 2019



"1. Como es bien sabido, lo mismo al concurso civil (artículo 570 del Código de Procedimiento Civil) que a la quiebra (Artículo 1º del Decreto 350 de 1989) puede precederlos una etapa previa a través de la cual se procura llegar a una solución amistosa que, expresada en un concordato, armonice los intereses de los acreedores con los del deudor común que no se encuentre en condiciones de atender normalmente el pago de sus obligaciones, evitándose así la liquidación forzosa del patrimonio que de ellas constituye garantía general, liquidación que de no mediar el acuerdo habrá de efectuarse en el correspondiente proceso concursal bajo una de aquellas dos modalidades, autónomas entre sí desde el punto de vista normativo, que ese tipo de procesos puede presentar en nuestro medio. A esta finalidad preventiva tienden, pues los trámites concordatarios potestativos cuya función, entendiéndolos desde luego como medidas benignas instituidas para beneficio de la honestidad no culpable, no es otra que la de obviar, por obra de la voluntad de los acreedores 'colectivizados' a instancia del deudor que ha actuado con rectitud, los graves efectos morales y económicos que al estado de falencia judicialmente declarada le son inherentes, consagrando por tanto la ley una serie de disposiciones que en orden a asegurar la efectividad de esa función, acarreen importantes modificaciones para los derechos de los interesados, bien sean los acreedores individual o colectivamente considerados, bien el deudor de cara a la nueva condición jurídica en que viene a quedar situado como consecuencia de la admisión a trámite de su pedido de concordato.

En este orden de ideas y por lo que con los primeros toca, es de destacarse la eficacia suspensiva o 'moratoria' que con evidente carácter de transitoriedad de dicha admisión se predica, definida en sus alcances por el artículo 1914 del Código de Comercio -hoy en el Capítulo IV del Título Primero del Decreto Ley 350 de 1989- y por virtud de la cual se impide, bajo pena de nulidad y mientras dure el procedimiento concordatario que por lo general termina cuando la providencia homologatoria del acuerdo adquiere plena firmeza, emprender o proseguir todo acto de ejecución judicial que disminuya el patrimonio del deudor o por la fuerza altere la situación igualitaria en que frente a él se encuentran los acreedores convocados, evitándose así que estos, al menos los más obstinados e intransigentes, puedan conseguir por anticipado y con menoscabo del principio de elemental justicia distributiva contenido en la regla de la '*par condicio creditorum*', hacer efectivos derechos que de otro modo habrían quedado sometidos

137

con seguridad a los aplazamientos y rebajas que comúnmente constituyen la esencia de cualquier concordato. Los efectos suspensivos de la providencia admisoria tienen, pues, un alcance preciso y determinado, acorde de suyo con la finalidad institucional que el legislador tuvo en cuenta al establecerlos, habida consideración que lo vedado en las disposiciones atrás mencionadas son los actos aislados de ejecución forzosa en cuya virtud pueda terminar por hacerse peor la condición de los acreedores a quienes el convenio vaya a afectar, actos que por su propia entidad procesal, además, suponen siempre una intimación judicial de pago dirigida al deudor y que este, después de admitida su solicitud de concordato y sin contar con autorización previa del juez del conocimiento, no puede realizar lícitamente de acuerdo con el artículo 1921 del Código de Comercio, sustituido en lo que a este particular atañe por el artículo 6°, numeral 3°, del Decreto 350 de 1989. En otras palabras y porque no van en detrimento de esa suspensión general de pagos impuesta por la ley, suspensión cuyo objeto específico -se reitera- es mantener la integridad del patrimonio del deudor y la inalterabilidad de los derechos creditorios que llevan aparejada ejecución, la prohibición bajo examen no alcanza a las acciones personales o reales, iniciadas o por iniciar, que se hagan valer a través de procesos declarativos, pues la simple apertura de un trámite concordatario, por sabido se tiene, no implica que desaparezca en el deudor la investidura suficiente para comparecer en juicio en defensa de su patrimonio, ello aparte de que al decir de renombrados expositores, León Bolaffio entre ellos (Bolaffio, Rocco y Vivante. Derecho Comercial. Tomo XX, Vol. III, Par. 5°), 'las acciones mobiliarias e inmobiliarias deducidas para el simple reconocimiento de derechos discutidos no perturban el procedimiento de concordato; por el contrario, lo facilitan ..., agregando que "establecer un plazo o una tregua para ese reconocimiento ha parecido un sacrificio injustificado con perjuicio individual y social mientras que las prescripciones y las caducidades ordinarias deberían en el interin quedar suspendidas ...', ya que es importante advertirlo, las prescripciones que se interrumpen por efecto de la admisión de la solicitud según los textos de los artículos 1914 del Código de Comercio y 16 del Decreto 350 de 1989, así como las caducidades que no operan de acuerdo también con estos preceptos, no son todas cual pudiera pensarse a primera vista, sino tan solo aquellas que dada la índole de la acción a que se refieren y en circunstancias normales, deban entenderse impedidas en su curso o eliminadas como consecuencia de los actos de ejecución que el ordenamiento positivo, en guarda de la finalidad esencial del concordato preventivo, prohíbe o manda detener".

con seguridad a los aplazamientos y rebajas que comúnmente constituyen la esencia de cualquier concordato. Los efectos suspensivos de la providencia admisoria tienen, pues, un alcance preciso y determinado, acorde de suyo con la finalidad institucional que el legislador tuvo en cuenta al establecerlos, habida consideración que lo vedado en las disposiciones atrás mencionadas son los actos aislados de ejecución forzosa en cuya virtud pueda terminar por hacerse peor la condición de los acreedores a quienes el convenio vaya a afectar, actos que por su propia entidad procesal, además, suponen siempre una intimación judicial de pago dirigida al deudor y que este, después de admitida su solicitud de concordato y sin contar con autorización previa del juez del conocimiento, no puede realizar lícitamente de acuerdo con el artículo 1921 del Código de Comercio, sustituido en lo que a este particular atañe por el artículo 6°, numeral 3°, del Decreto 350 de 1989. En otras palabras y porque no van en detrimento de esa suspensión general de pagos impuesta por la ley, suspensión cuyo objeto específico -se reitera- es mantener la integridad del patrimonio del deudor y la inalterabilidad de los derechos creditorios que llevan aparejada ejecución, la prohibición bajo examen no alcanza a las acciones personales o reales, iniciadas o por iniciar, que se hagan valer a través de procesos declarativos, pues la simple apertura de un trámite concordatario, por sabido se tiene, no implica que desaparezca en el deudor la investidura suficiente para comparecer en juicio en defensa de su patrimonio, ello aparte de que al decir de renombrados expositores, León Bolaffio entre ellos (Bolaffio, Rocco y Vivante. Derecho Comercial. Tomo XX, Vol. III, Par. 5°), 'las acciones mobiliarias e inmobiliarias deducidas para el simple reconocimiento de derechos discutidos no perturban el procedimiento de concordato; por el contrario, lo facilitan ..., agregando que "establecer un plazo o una tregua para ese reconocimiento ha parecido un sacrificio injustificado con perjuicio individual y social mientras que las prescripciones y las caducidades ordinarias deberían en el interin quedar suspendidas ...', ya que es importante advertirlo, las prescripciones que se interrumpen por efecto de la admisión de la solicitud según los textos de los artículos 1914 del Código de Comercio y 16 del Decreto 350 de 1989, así como las caducidades que no operan de acuerdo también con estos preceptos, no son todas cual pudiera pensarse a primera vista, sino tan solo aquellas que dada la índole de la acción a que se refieren y en circunstancias normales, deban entenderse impedidas en su curso o eliminadas como consecuencia de los actos de ejecución que el ordenamiento positivo, en guarda de la finalidad esencial del concordato preventivo, prohíbe o manda detener".

"4. Prevalencia de los procesos Concordatarios frente a los procesos ejecutivos

La doctrina constitucional de esta Corporación ha sostenido que, *'Los procesos concursales, ya sean acuerdos de pago o liquidaciones patrimoniales participan de una misma estructura conceptual, así se destinen a la conservación y recuperación de la empresa o a la satisfacción ordenada del crédito por cuanto i) son asuntos de interés general, ii) convocan a todos los acreedores, iii) vinculan la totalidad de los bienes del deudor, y iv) han de dejar zanjadas las diferencias surgidas entre el deudor y sus acreedores, a causa del incumplimiento del primero'*. (Sentencia C-263/02)

En lo que se refiere al concordato, su objetivo consiste en la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como la protección adecuada del crédito. (art. 94 ley 222 de 1995)

Por su naturaleza y fines, el concordato prevalece sobre los procesos ejecutivos singulares que se estén surtiendo en contra de quien se encuentra inmerso en él; por ello los bienes de propiedad del deudor que se estén persiguiendo en estos últimos deben ingresar a la masa de bienes del concordato, con la finalidad de que formen parte del acuerdo que se celebre entre el deudor y sus acreedores. [...]"

Igualmente, mediante Auto OC-CL- 0169 del 28 de enero de 1992, refirió la Superintendencia de Sociedades:

"Aprobado el acuerdo concordatario y fijado el pasivo externo laboral, entre otros, y establecidos incluso la forma y el término para cancelar las acreencias correspondientes a dicho pasivo, la incorporación de un proceso ejecutivo laboral conllevaría necesariamente la modificación del acuerdo concordatario, modificación que solo podría llevarse a cabo con el lleno de las formalidades previstas en el art. 38 del decreto 350.

Extemporaneidad de la remisión del proceso

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 12 del decreto precitado "...los procesos ejecutivos de cualquier clase contra el empresario, salvo los de alimentos... serán incorporados al concordato...". Obviamente, siempre y cuando el concordato se halle en alguna de las etapas procesales de trámite, pues si el concordato se halla en la etapa procesal de ejecución del acuerdo concordatario, como en nuestro caso, los procesos no pueden ser incorporados al trámite concursal sencillamente porque dicho trámite ha precluido.

Incorporar un proceso ejecutivo al concordato, cuando este se halla en la etapa de ejecución del acuerdo concordatario, conlleva, como ya se dijo, la modificación necesaria del acuerdo, lo cual hace totalmente improcedente la incorporación. Y en este sentido se dice que el proceso fue remitido al Despacho extemporáneamente".

En ese sentido, nos es posible concluir que la jurisprudencia ha sido pacífica al propender, por la protección del capital social dentro del proceso de reorganización, reconociendo en diferentes pronunciamientos y ante diferentes instancias, la protección que existe sobre éste como plena garantía de los acreedores.

Lo anterior ha conllevado al concepto de responsabilidad subsidiaria, bajo el cual, corresponde al acreedor para efectos de atacar el capital del socio, evidenciar la imposibilidad absoluta de la empresa, situación que no se demuestra en este caso, en tanto mi representada se encuentra en cumplimiento de las condiciones del acuerdo.

Esto debe aunarse a que los socios cuentan con la facultad legal de oponerse ante el pedimento del aquí ejecutante, respecto a que la acreencia se garantice con capital ajeno, tal y como predispone el artículo 60 de la Ley 1116 de 2006:

"Artículo 60. Obligaciones a cargo de los socios. Reglamentado por el Decreto Nacional 1749 de 2011. Cuando sean insuficientes los activos para atender el pago de los pasivos de la entidad deudora, el liquidador deberá exigir a los socios el pago del valor de los instalamentos de las cuotas o acciones no pagadas y el correspondiente a la responsabilidad adicional pactada en los estatutos.

Para los efectos de este artículo, el liquidador promoverá proceso ejecutivo contra los socios, el cual tramitará ante el juez que conozca del proceso de liquidación judicial. En estos procesos, el título ejecutivo lo integrará la copia de los inventarios y avalúos en firme y una certificación de contador público o de revisor fiscal, si lo hubiere, que acredite la insuficiencia de los activos y la cuantía de la prestación a cargo del socio.

129

No obstante, los socios podrán proponer como excepción la suficiencia de los activos sociales, o el hecho de que no fueron destinados al pago del pasivo externo de la sociedad."

Por todo lo anterior, me permito comedidamente elevar la siguiente:

PETICIÓN

1. REVOCAR cualquier mandamiento de pago librado en contra de mi representada o socios, por no existir competencia para tal fin y encontrarse INDUSRTIAS CONTINENTAL Y CIA S. EN C. S. en cumplimiento del acuerdo.

SUBSIDIARIA:

- Subsidiariamente informo a esta instancia que he procedido a realizar las respectivas anotaciones dentro de los libros de accionistas.

Del Señor Juez; Cordialmente,

Industrias Continental
Artículos Eléctricos
Florez Osorio y Cia. S en C

MARÍA FANNY OSORIO DE FLOREZ
C.C. No. 29.656.939